



# Uno de cada tres madrileños depende de Quirón para sus pruebas médicas

El coloso privado es el encargado de esos diagnósticos en un área de 2,25 millones de habitantes tras sumar el mayor laboratorio a otros cuatro que controlaba antes

FERNANDO PEINADO  
SEBASTIÁN CASSE  
Madrid

El gigante hospitalario Quirónsalud tiene desde el lunes de la semana pasada aún más responsabilidad dentro de la sanidad pública madrileña. Ese día empezó a gestionar el laboratorio más grande por población de la sanidad pública madrileña, un centro de tres plantas en la Torre 4 del hospital de San Sebastián de los Reyes donde se procesan las pruebas de un área correspondiente a casi 1,4 millones de habitantes. A estos diagnósticos se suman los que viene haciendo desde hace años en los cuatro hospitales bajo su control que prestan servicio a casi un millón de ciudadanos. En total son 2,25 millones de habitantes. Supone, según una estimación de EL PAÍS, un 32,12% de la población madrileña, es decir, casi uno de cada tres ciudadanos depende de Quirón para sus análisis clínicos, como la sangre o la orina, salvo si optan por otro centro en uso de la libertad de elección.

La magnitud de la cifra alimenta el debate sobre la creciente influencia del grupo privado en la sanidad madrileña. También proporciona argumentos a la oposición de izquierdas, que observa con recelo la relación de la Comunidad de Madrid con una empresa para la que trabaja la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consultor sanitario Alberto González Amador. Los madrileños que viven en el territorio donde Quirón es la encargada de sus analíticas son los adscritos a diez hospitales de la red pública. Por un lado, los residentes en las áreas de referencia de los seis hospitales que dependen del laboratorio central: San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Coslada, Arganda del Rey, Parla y Aranjuez. Por otra, los cuatro hospitales de la red pública cuya gestión ya estaba en manos del grupo.

Esos madrileños pueden hacer

sus pruebas en otro hospital en uso de la libertad de elección que rigió desde tiempos de Esperanza Aguirre. Sin embargo, esa política ha favorecido a los cuatro hospitales controlados por Quirón, los primeros en el ranking de los centros más elegidos. La Comunidad paga un extra a la empresa por cada madrileño que viaje a territorio Quirón.

Quirón percibirá 120 millones de euros durante los próximos cinco años por la gestión del laboratorio de San Sebastián. La adjudicación pone fin a una etapa de más de tres lustros en la que el servicio estuvo en manos de Ribera Salud, que lo gestionaba desde su inauguración en 2008.

El proyecto nació durante la era Aguirre con una filosofía poco habitual en el sistema sanitario español: concentrar en un único laboratorio las pruebas de varios hospitales para ganar eficiencia. Frente al modelo tradicional, en el que cada hospital dispone de sus propias instalaciones diagnósticas, la Comunidad optó por externalizar el servicio y centralizar la actividad.

La gestión de laboratorios no se caracteriza por altos márgenes de beneficio debido al alto coste de personal o reactivos, pero varios expertos de la industria consideran que Quirón parte con ventajas competitivas. Su tamaño le permite negociar descuentos en los suministros con los proveedores de reactivos y aprovechar economías de escala difícilmente alcanzables por operadores más pequeños.

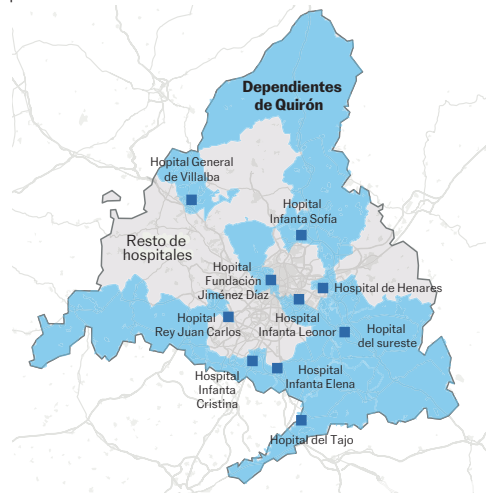
La compañía dispone de 41 laboratorios clínicos y procesa más de seis millones de pruebas al año. A solo siete kilómetros del hospital de San Sebastián se levanta un gran laboratorio privado propio, en el edificio Caoba, una torre de oficinas de cristal en Alcobendas.

“Es un modelo industrial”, valora José Ramón Repullo, profesor emérito de Economía de la Salud en la Escuela Nacional de

## Las zonas donde Quirón es competente para hacer las pruebas de laboratorio

Áreas unidas por zona básica de salud

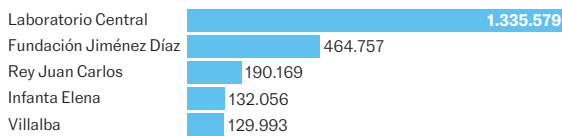
■ Hospitales



## Población que depende de Quirón para sus pruebas



## Residentes en las áreas de referencia de los hospitales públicos donde se encuentran los laboratorios



La cifra de Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Villalba y Valdemoro corresponde al 31/12/2023 (última disponible) y para el laboratorio central y el total de población al 31/12/2024.

Fuente: Memorias de 2024 de los hospitales

EL PAÍS

Sanidad. “A partir de cierto volumen les da igual hacer 1.000 que 1.100 análisis porque el coste de nuevas pruebas es relativamente reducido”.

Quirón también se beneficia de que las pruebas genéticas, las más caras, han quedado por primera vez fuera del contrato. En adelante esos estudios cuyo coste puede alcanzar los 3.000 euros, serán asumidos por los laboratorios de los grandes hospitales públicos de la región.

Otra ventaja para Quirón es que no ha sido obligada por la Comunidad a heredar la plantilla existente. De este modo, los trabajadores que han optado por continuar en el centro (algo más de la mitad, según Quirón), han perdido sus derechos de antigüedad, lo que supone una ventaja para la empresa porque ante un poten-

cial despido se ahorra una indemnización cuantiosa.

Quirón opera en el sector de laboratorios bajo la marca Health Diagnostics. Es la segunda mayor compañía de España en ese mercado, solo por detrás de Eurofins y por delante de Echevarne, Unilabs y Reference, según el observatorio DBK de la consultora Informa. Esta industria generó 3.715 millones de euros en 2024. En los últimos años los grandes han crecido a base de engullir a laboratorios pequeños. Parte del protagonismo de Quirón se debe a su poder en el mercado de los reconocimientos médicos laborales, donde Quirónprevención es líder sectorial.

Quirón amplía su presencia en la sanidad pública en un momento de especial escrutinio sobre sus relaciones con el Ejecutivo

de Ayuso. Hace apenas dos semanas, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, salió en defensa de los contratos de la Comunidad con Quirón, tras conocerse nuevas informaciones sobre los ingresos obtenidos por Amador procedentes del grupo. La pareja de Ayuso había facturado 4,4 millones a Quirón en los primeros tres años de noviazgo.

Matute subrayó que la relación de su Gobierno con el grupo era previa a la llegada de la presidenta al poder, en 2019. “Son contratos que vienen de 2006 y 2010”, dijo Matute, en referencia a los acuerdos relativos a los cuatro hospitales bajo control de Quirón que prestan servicio a la pública con acuerdos de 30 años.

Pero la oposición de izquierdas ha denunciado que la Comunidad da por otras vías un presunto trato de favor a Quirón. Han llamado la atención los pagos de cientos de millones que fueron desatascados en 2022 después del cese de la interventora general o la creciente facturación de la empresa gracias a la combinación de unas listas de espera abultadas y el sistema de libre elección de hospital.

La cooperación con la Comunidad constituye uno de los pilares del negocio de Quirón. El grupo facturó el año pasado 5.429 millones de euros. Casi un 20% del dinero proviene de la Consejería de Sanidad madrileña, a la que ha facturado anualmente en torno a mil millones de euros de media en la era Ayuso por los cuatro hospitales que maneja en la red pública.

A esto se añaden las sospechas por los vínculos personales de Ayuso con Quirón. Además de los negocios de su pareja para ese grupo, que están bajo lupa judicial, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, o su consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, han trabajado antes para ese conglomerado. De hecho, la radióloga Matute fue una de las directoras de Health Diagnostics, cuya segunda pata es el diagnóstico por imagen.

El contrato del laboratorio “es una mala señal”, según la portavoz sanitaria de Más Madrid, Marta Carmona. “El motor fundamental de este grupo empresarial es la rentabilidad económica, no las necesidades de salud. ¿Qué garantía tienen 2,3 millones de madrileños de que van a tener a su disposición las técnicas más indicadas clínicamente y no aquellas que dejan más margen de beneficio a la empresa?” El contrato prevé que la Comunidad pueda hacer cuantas inspecciones considere oportunas y la creación de una comisión bilateral de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año, pero nada se dice sobre las sanciones por incumplimientos.

El PSOE considera un “escándalo” que la consejería “se lave las manos” por la pérdida de derechos de la plantilla y el perdón de las pruebas genéticas. Su portavoz sanitario en el Parlamento regional, Carlos Moreno, habla de “complicidades” con empresas privadas “cada vez más descaradas”.